

REF ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: JORGE HERNANDO CASTAÑO TOBÓN
DEMANDADOS: AFP PORVENIR S.A
COLPENSIONES

LAURA VANESSA RINCÓN ROMÁN, mayor y vecina de la ciudad de Pereira, Risaralda, identificada con cédula de ciudadanía No 1.088.304.969 expedida en la ciudad de Pereira, abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional No 263.377 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada judicial del señor **JORGE HERNANDO CASTAÑO TOBÓN** igualmente mayor de edad y vecino de la ciudad de Pereira, Risaralda identificado con cédula de ciudadanía No 18.590.215, de conformidad al poder anexo, me permito formular demanda ORDINARIA LABORAL DE INEFICACIA EN EL TRASLADO DE RÉGIMEN, en contra de la AFP PORVENIR S.A y la Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES- de acuerdo a los siguientes:

HECHOS:

PRIMERO: Mi poderdante JORGE HERNANDO CASTAÑO TOBÓN, nació el 26 de noviembre de 1961, por lo que a la fecha cuenta con 62 años.

SEGUNDO: Estuvo vinculado al Régimen de Prima Media administrado en su momento por el Instituto de Seguros Sociales desde el 11 de febrero de 1995 al 6 de julio de 1996.

TERCERO: Para el mes de octubre de 1996 estuvo afiliado a la AFP COFONDOS, y posteriormente desde el mes de octubre de 1997 se afilió a la AFP PORVENIR S.A

CUARTO: Las razones que motivaron el cambio de régimen a mi prohijado, fue básicamente las que manifestó en su momento el asesor del fondo privado, las cuales consistían en que la ventaja del fondo privado era que se podía pensionar en cualquier tiempo, ya que no era necesario el cumplimiento de la edad.

QUINTO: Conforme a lo anterior, nunca se le informó cuál era el saldo que debía acreditar en su cuenta personal, esto es, cual era el IBC con el que debía cotizar en aras de alcanzar una pensión anticipada.

SEXTO: Tampoco se le explicó por parte de la AFP PORVENIR S.A que su pensión podía ser inferior a la que podría alcanzar en el Régimen de Prima Media, habida cuenta de los IBC que presentaba en las cotizaciones realizadas en el Régimen de Prima Media.

SÉPTIMO: Mi poderdante fue engañado por parte de los asesores de AFP PORVENIR S.A como quiera que **NUNCA** se le informó o se le brindó una asesoría integral, respecto de la diferencia entre un régimen y otro, de cara a las consecuencias jurídicas y económicas que acarrearía el pasar



del Régimen de Prima media (RPM) al Régimen de Ahorro individual con Solidaridad (RAIS).

OCTAVO: Al señor JORGE HERNANDO CASTAÑO TOBÓN en el momento de su afiliación al fondo privado, **NUNCA** se le explicó de manera clara, precisa y detallada los riesgos que implicaba el paso de régimen, esto es, las ventajas o desventajas que podrían presentarse.

NOVENO: A mi poderdante, JORGE HERNANDO CASTAÑO TOBÓN, dentro de la asesoría brindada al momento de la afiliación y/o durante los años de estadía dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) **NUNCA** le han sido presentadas proyecciones comparativas financieras, sobre el monto de la pensión en el régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) y el monto de la pensión en el Régimen de Prima Media co. Prestación definida (RPM), lo anterior con respecto a los IBC reportados por el afiliado o usuario.

DÉCIMO: A mi poderdante, JORGE HERNANDO CASTAÑO TOBÓN, dentro de la asesoría brindada al momento de la afiliación y/o durante los años de estadía dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) **NUNCA** le han sido presentados cuadro comparativo de ventajas y desventajas de permanecer en dicho régimen o de trasladarse al RPM, lo anterior con respecto a los IBC reportados por el afiliado o usuario.

DÉCIMO PRIMERO: Mi poderdante **NUNCA** firmó un consentimiento informado, libre y espontáneo, ausente de vicio o error, en donde manifieste que era consciente de que la pensión en el régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) podría ser inferior a la adquirida en el régimen de prima media con prestación definida (RPM); lo anterior con base en los IBC reportados al momento de la afiliación y/o los reportados durante su vida laboral.

DÉCIMO SEGUNDO: Al señor JORGE HERNANDO CASTAÑO TOBÓN, **NUNCA** le fue informado por parte de los asesores del AFP PORVENIR S.A con base en los IBC reportados en su historia laboral, si podría verse beneficiado al trasladarse del régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) al régimen de prima media con prestación definida (RPM).

DÉCIMO TERCERO: Al señor JORGE HERNANDO CASTAÑO TOBÓN, **NUNCA** le fue informado por parte de los asesores del fondo privado AFP PORVENIR S.A, la posibilidad de trasladarse al Régimen de Prima Media administrado por el ISS hoy COLPENSIONES, lo anterior con base en los IBC reportados durante su vida laboral, en especial a los reportados en los años anteriores al cumplimiento de la edad máxima de traslado.

DÉCIMO CUARTO: Con base en los hechos narrados anteriormente, la afiliación suscrita entre mi poderdante y el fondo de pensiones, deberá ser declarada ineficaz por el juez de conocimiento, por violación a los perpetuado en el literal B) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, Y 271 ibídem.

DÉCIMO QUINTO: Mi poderdante el 9 de marzo de 2023, solicitó a COLPENSIONES cambio de su régimen pensional (mediante reclamación administrativa) con radicado 2023_3735310



DÉCIMO SEXTO: Colpensiones dio respuesta el 9 de marzo de 2023 al radicado 2023_3735310, informando que su solicitud no había sido aceptada por cuanto la información consultada indicaba que se encuentra a diez o menos años del requisito para pensionarse.

DÉCIMO SÉPTIMO: El 26 de julio de 2023 se solicitó a PORVENIR mediante radicado **0105672024928400** : " se requiere de POVENIRS.A acepte la "desafiliación" del señor JORGE HERNANDO CASTAÑO TOBÓN, como quiera que su afiliación al RAIS, deberá ser declarada INEFICAZ, por violación a lo preceptuado el literal b) del artículo 13 de la ley 100 de 1993 y 271 ibidem."

PRETENSIONES

Con fundamento en los hechos anteriormente expuestos, solicito de la manera más atenta se efectué el proceso conforme al trámite señalado en la ley 1149 de 2007 y se sirva su señoría dictar sentencia de fondo, en la que se hagan las siguientes o semejantes declaraciones y condenas:

PRIMERA: Se declare la ineficacia del traslado del señor JORGE HERNANDO CASTAÑO TOBÓN del régimen de prima media (RPM) (ISS hoy COLPENSIONES) al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) AFP PORVENIR S.A

SEGUNDO: Se declare la inexistencia del contrato de afiliación celebrado entre el señor JORGE HERNANDO CASTAÑO TOBÓN y el fondo privado de pensiones PROTECCIÓN S.A PENSIONES Y CESANTÍAS.

TERCERO: Se declare que está vigente la afiliación al RPM-COLPENSIONES del señor JORGE HERNANDO CASTAÑO TOBÓN.

CUARTA: Como consecuencia de lo anterior, se ordene a COLPENSIONES aceptar su traslado o retorno al RPM, y a AFP PORVENIR S.A Y CESANTÍAS la devolución o pago a COLPENSIONES de todos los aportes recibidos, junto con sus rendimientos y cuotas de administración.

QUINTA: Se solicita al señor Juez declare o reconozca los derechos aun no solicitados, en aplicación de los principios ultra y extra petita que rigen en el Derecho Laboral, así como la aplicación del principio ***Iura Novit Curia***.

SEXTA: Se condene a la demandada, al pago de costas judiciales que se causen como consecuencia del presente proceso.



RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamentos de derecho encontramos el artículo 48 de la Constitución Política Colombiana el cual consagra el derecho irrenunciable a la seguridad social, incluyendo la posibilidad de acceder a la pensión de vejez en las condiciones establecidas en la ley.

En igual sentido, en los artículos **13 LITERAL B) Y 271 DE LA LEY 100 DE 1993. consagra:**

Art 13. Literal b: “La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior **es libre y voluntaria por parte del afiliado**, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, **se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley**”. *Negrita fuera de texto.*

Art. 271: “El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. **La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador**”. *Negrita fuera de texto.*

EL concepto de violación de las normas atrás señaladas **radica en la falta de información** por parte del asesor del fondo de pensiones privados, PROTECCIÓN S.A PENSIONES Y CESANTÍAS, esto es, al momento de la afiliación, o durante los años de estadía dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), de mi poderdante JORGE CASTAÑO TOBÓN como quiera que el deber de asesoría que les asistía a dicha entidad y/o asesor, era el de brindar información completa e integral, que permitiera tomar una decisión informada; lo anterior como quiera que los Fondo Privados de Pensiones así como los que administran el RPM, están vigilados por la SUPERFINANCIERA, esto es, deben acatar sus directrices, así como las que tienen que ver con la legislación de protección al consumidor, (Ley 1328 de 2009); y es que si bien es cierto esta legislación es posterior a la ocurrencia de los hechos, **no significa lo anterior que las entidades de la seguridad social, antes no tuvieran esa obligación, pues como se dijo en precedencia, existía norma especial que fue vulnerada por las entidades demandadas**



(Entiéndase artículos 13 literal b) y 271 de la ley 100 de 1993), como quiera que al no haber sido mi poderdante informado sobre los riesgos y beneficios del traslado, se vició su consentimiento y por lo tanto su afiliación al RAIS no fue ni libre, ni voluntaria.

Así mismo, los principios que están consagrados en esta ley, 1328 de 2009, básicamente lo que hacen es clasificar las responsabilidades de las entidades que administran la pensión respecto de la información suministrada a las personas al momento de tomar una decisión, estos principios son, **la debida diligencia, la transparencia y la libertad de elección**, es decir, la libertad de tomar la decisión, siempre y cuando el consumidor tenga un convencimiento racional del tema, y es que para poderse materializar el principio de libertad de elección, se debe tener acceso a la transparente información, cierta, suficiente y oportuna, porque de lo contrario la responsabilidad recae sobre las entidades vigiladas.

Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencia SL 12136-2014, Radicado No. 46.292, Magistrada Ponente Dra Elsy del Pilar Cuello Calderón, al analizar las consecuencias del desconocimiento del derecho del trabajador para tomar una decisión libre y voluntaria al momento de trasladarse de régimen de pensiones, fijó los lineamientos de la información mínima necesaria que debe entregar la administradora de fondos de pensiones al trabajador en los siguientes términos:

*"A juicio de esta Sala no podría argüirse **que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito.**"*

*Solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, **sino de determinar si hubo eficacia en el traslado, lo que es relevante para entrar a fijar la pérdida o no de la transición normativa.** Al juzgador no le debe bastar con advertir que existió un traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, sino que es menester, para la solución, advertir que la misma es válida, lo cual resulta un presupuesto obvio, máxime cuando esta Sala ha sostenido que el régimen de transición no es una mera expectativa."*



Por todo lo anterior, podemos concluir que afectándose esa **libertad de elección**, por la falta de información suficiente, veraz y oportuna, que permitiera tomar una decisión objetiva y a conciencia por parte de mi representado **JORGE HERNANDO CASTAÑO TOBÓN** sobre las implicaciones que tendría en su futuro pensional un traslado del RPM al RAIS; sumándole el conflicto de interés de los asesores del RAIS, es claro que se debe aplicar por parte del señor JUEZ, las consecuencias señaladas en el art 271 de la ley 100 de 1993, en concordancia con lo estipulado en el artículo 13 literal b) de la ley 100 de 1993.

Anuado a lo anterior, el MINIMO VITAL de mi poderdante en el caso de que no se acceda a las pretensiones de esta demanda, se vería afectado, como quiera que la PENSIÓN OBTENIDA EN EL RAIS – **AFP PORVENIR S.A**, es muy inferior a la que podría obtener en el RPM – **COLPENSIONES**, situación que como se ha dicho incansablemente, **NUNCA** fue explicada al señor JORGE HERNANDO CASTAÑO TOBÓN, ya que si el asesor del RAIS le hubiese comunicado que la diferencia en la mesada pensional entre el RPM y el RAIS; es claro que nunca se habría afiliado a dicha entidad –**AFP PORVENIR S.A**; pues se repite, en nada se beneficiaba al trasladarse; y no es de recibo los argumentos de las AFP, al querer trasladarle la responsabilidad a los usuarios, pues como se dijo, el deber era de la entidad, y el usuario simplemente confió en la buena fe de quien lo inducía al cambio de régimen, sin saber las consecuencias jurídicas y económicas de su decisión.

Ahora bien, en reiterada jurisprudencia se advierte que para que el traslado sea válido, es necesario que la administradora de Pensiones **DEMUESTRE** que le suministró al trabajador y futuro afiliado, como mínimo, la siguiente información:

1. Beneficios que dispense el régimen al que pretende trasladarse.
2. El monto de la pensión que en cada uno de ellos se proyecte.
3. La diferencia en el pago de los aportes que allí se analizarían.
4. Las implicaciones y la conveniencia o no de la eventual decisión

En este orden de ideas y de acuerdo con el artículo 271 de la ley 100 de 1993 y la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, el traslado de régimen de mi poderdante del 5 de junio de 1998 es ineficaz, y en consecuencia, tiene derecho que le sea reconocida como válida su afiliación inicial al régimen de prima media con prestación definida administrada actualmente por la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES.

Para reforzar todo lo anterior me permito citar apartes de la sentencia de la **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL**, **MAGISTRADO PONENTE EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS**, Referencia:



Expediente No. 31989, Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil ocho (2008); donde dice:

"Las administradoras de pensiones hacen parte, como elemento estructural, del sistema; mediante ellas el Estado provee el servicio público de pensiones; tienen fundamento constitucional en el artículo 48 de la Carta Política, que autoriza su existencia, -desarrollado por los artículos 90 y s.s. de la Ley 100 de 1993 - cuando le atribuye al Estado la responsabilidad por la prestación del servicio público, "la dirección, coordinación y control" de la Seguridad Social, y autoriza su prestación a través de particulares.

"La doble condición de las administradoras de pensiones, de sociedades que prestan servicios financieros y de entidades del servicio público de seguridad social, es compendiada en la calificación de instituciones de carácter previsional, que les atribuye el artículo 4º del Decreto 656 de 1994, y que se ha de traducir en una entidad con solvencia en el manejo financiero, formada en la ética del servicio público.

"Ciertamente las administradoras de pensiones son en esencia fiduciarias del servicio público de pensiones, razón por la cual su comportamiento y determinaciones deben estar orientadas no sólo a alcanzar sus propias metas de crecimiento y beneficio, sino a satisfacer de la mejor manera el interés colectivo que se realiza en cada persona que queda desprotegida por haberse cernido sobre sí una enfermedad o trauma que lo deja inválido, o la muerte sobre el miembro de la familia del cual depende, o sobre su afiliado cuando le llega el momento de su retiro de la vida productiva por imposición o disfrute de la vejez.

"Las administradoras de pensiones lo son de un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, según lo prescribe el artículo 97 de la Ley 100 de 1993; la ley radica en ellas el deber de gestión de los intereses de quienes se vinculen a ellas, y cuyos deberes surgen desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de su afiliación a la administradora.

"Es razón de existencia de las Administradoras la necesidad del sistema de actuar mediante instituciones especializadas e idóneas, con conocimientos y experiencia, que resulten confiables a los ciudadanos quienes les van a entregar sus ahorros y sus seguros de previsión para su vejez, su invalidez o para su familia cercana en caso de muerte prematura.

"Esas particularidades ubican a las Administradoras en el campo de la responsabilidad profesional, obligadas a prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, la misma que, por ejercerse en un campo que la Constitución Política estima que concierne a los intereses públicos, tanto desde la perspectiva del artículo 48 como del artículo 335, se ha de



estimar con una vara de rigor superior a la que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares.

“Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de carácter profesional, la que le impone el deber de cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente le señalan las normas, en especial las de los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del C.C., regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o contractual.

“La doctrina ha bien elaborado un conjunto de obligaciones especiales, con específica vigencia para todas aquellas entidades cuya esencia es la gestión fiduciaria, como la de las administradoras de pensiones, que emanan de la buena fe, como el de la transparencia, vigilancia, y el deber de información.

“La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad.

“Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

“Bajo estos parámetros es evidente que el engaño que protesta el actor tiene su fuente en la falta al deber de información en que incurrió la administradora; en asunto neurálgico, como era el cambio de régimen de pensiones, de quien ya había alcanzado el derecho a una pensión en el sistema de prima media, su obligación era la de anteponer a su interés propio de ganar un afiliado, la clara inconveniencia de postergar el derecho por más de cinco años, bajo la advertencia de que el provecho de la pensión a los sesenta años, era solo a costa de disminuir el valor del bono pensional, castigado por su venta anticipada a la fecha de redención.



"En estas condiciones el engaño, no solo se produce en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de decisión que se persigue; de esta manera la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad demandada.

"No desdice la anterior conclusión, lo asentado en la solicitud de vinculación a la Administradora de Pensiones que aparece firmada por el demandante, que su traslado al régimen de ahorro individual se dio de manera voluntaria, que "se realizó de forma libre, espontánea y sin presiones", pues lo que se echa de menos es la falta de información veraz y suficiente, de que esa decisión no tiene tal carácter si se adopta sin el pleno conocimiento de lo que ella entraña.

Así mismo, me permito complementar este argumento jurídico teniendo como precedente la **SENTENCIA SL1452, RAD. 68852 DE 3 DE ABRIL DE 2019, LA SALA DE CASACIÓN LABORAL, MP CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO**

"De esta manera, como puede verse, desde su fundación, las sociedades administradoras de fondos de pensiones tenían la obligación de garantizar una afiliación libre y voluntaria, mediante la entrega de la información suficiente y transparente que permitiera al afiliado elegir entre las distintas opciones posibles en el mercado, aquella que mejor se ajustara a sus intereses. No se trataba por tanto de una carrera de los promotores de las AFP por capturar a los ciudadanos incautos mediante habilidades y destrezas en el ofrecimiento de los servicios, sin importar las repercusiones colectivas que ello pudiese traer en el futuro. La actividad de explotación económica del servicio de la seguridad social debía estar precedida del respeto debido a las personas e inspirado en los principios de prevalencia del interés general, transparencia y buena fe de quien presta un servicio público."

"Desde este punto de vista, para la Corte es claro que desde su fundación, las administradoras ya se encontraban obligadas a brindar información objetiva, comparada y transparente a los usuarios sobre las características de los dos regímenes pensionales, pues solo así era posible adquirir "un juicio claro y objetivo" de "las mejores opciones del mercado".

"Por demás las implicaciones de la asimetría en la información, determinante para advertir sobre la validez o no de la escogencia del régimen pensional, no solo estaba contemplada con la severidad del artículo 13 atrás indicado, sino además el Estatuto Financiero de la época, para controlarla, imponía, en los artículos 97 y siguientes que las administradoras, entre ellas las de pensiones, debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios de buena fe "y de servicio a los intereses sociales" en las que se sancionaba que no se diera información relevante, e incluso se indicaba que "Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de



elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado”.

Para que proceda la ineficacia del cambio de régimen pensional no se exige que al tiempo del traslado el usuario cuente con un derecho consolidado, un beneficio transicional o que esté próximo a pensionarse, pues ni la legislación ni la jurisprudencia establecen tales condiciones y, en todo caso, la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado considerado en sí mismo, desde luego, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso

Finalmente, para reforzar todo lo anterior me permito citar precedente reciente de la **SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL M.P ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN, Referencia: Expediente No. 66001-31-05-003-2020-00078-01, de fecha 6 de junio de 2022** la cual reza:

"Entre las obligaciones enrostradas está el deber de otorgar al afiliado la información necesaria y suficiente sobre todas las etapas del proceso, esto es, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional. En este sentido, las Administradoras de Pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad, por ello, el primero debe proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

Lo anterior, tiene fundamento en lo manifestado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias con radicaciones 31314 y 31989 del 9 de septiembre de 2008, No. 33083 del 22 de noviembre de 2011 y la sentencia SL-12136 rad. No 46292 del 3 de septiembre de 2014.

Es de anotar que la jurisprudencia antes citada corresponde a traslados respecto a personas beneficiarias del régimen de transición, sin embargo, en pronunciamiento efectuado en sentencia SL1452, rad. 68852 de 3 de abril de 2019, la Sala de Casación Laboral aclaró que esa falta de deber de información, independientemente de la expectativa pensional, conlleva la ineficacia del traslado de régimen.

En torno a la carga de la prueba, debe decirse que corresponde al fondo de pensiones ante quien se realizó el traslado, el acreditar que explicó las condiciones del traslado en los términos antes referidos, pues, este es quien tiene los documentos y la información en general que le suministró



al interesado, circunstancia que la AFP demandada en este caso no probó. No puede pretenderse que el afiliado acredite tales aspectos, puesto que, las normas que rigen a los fondos privados imponen el deber de información, razón suficiente para que estos precisen las pruebas que acrediten la información brindada.”

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

Se estima una cuantía superior a los 20 SMMLV.

CUMPLIMIENTO LEY 2213 DE 2022

Conforme lo consagrado en el artículo 6 la ley 2213 de 2022 que declaró permanente el Decreto 806 de 2020, me permito agregar constancia de envío simultáneo a las partes con la radicación de la presente demanda.

COMPETENCIA

Le compete a su despacho señor Juez, por la naturaleza del proceso correspondiente al Art 2 ordinal 4 del CPTSS, por ser un asunto sin cuantía según lo determina el artículo 12 del CPTSS y por el lugar donde se negó el traslado de régimen.

Normas concordantes: Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social art. 2 Núm. 4, 11 y 13 / Ley 712 de 2001 art. 8.

PROCEDIMIENTO

En cuanto al procedimiento, por tratarse de un asunto sin cuantía, debe dársele a este proceso el trámite de un **ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA**.

PRUEBAS

Solicito se decreten, practiquen y tengan como tales las siguientes:

DOCUMENTALES:

LAS QUE SE APORTAN:

1. Copia reclamación administrativa- “Solicitud de traslado a RPM PORVENIR S.A”.
2. Copia reclamación Administrativa COLPENSIONES.
3. Respuesta reclamación administrativa por parte de COLPENSIONES.
4. Copia historia laboral Consolidada PORVENIR.



DOCUMENTALES QUE SE SOLICITAN:

Se solicita de la manera más atenta para que por medio de la secretaría de su despacho y una vez se dicte auto admisorio, se libren las siguientes ordenes u oficios a las entidades demandadas, es de anotar que previo a la interposición de la demanda, esta parte interesada, dando cumplimiento al artículo 23 de la Constitución Política Nacional y art 13 y siguientes de la ley 1755 de 2015, **especialmente a los postulados del art 78 N. 10 de la ley 1564 de 2012(CGP) se requirió a las entidades accionadas para que rindieran la información aca solicitada así:**

PRUEBAS POR INFORME ART 275, de la ley 1564 de 2012

-Ofíciase a la Asministradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES, para que:

1. Aporte la carpeta administrativa del demandante que tenga en su poder, cuando estuvo vinculado con la entidad, incluyendo la historia laboral.

-Ofíciase a PORVENIR S.A para que:

1. Allegue al plenario, formulario de afiliación del demandante.
2. Informen, con base en el total del ahorro acumulado, **si hoy obtuviera la pensión de vejez** el señor JORGE HERNANDO CASTAÑO TOBÓN, a cuánto ascendería el monto de la mesada pensional, presentar las respectivas variables.
3. Solicito, a Pla AFP PORVENIR S.A para que allegue copia de los documentos en los que conste la afiliación y la información brindada a JORGE HERNANDO CASTAÑO TOBÓN, para proceder al cambio del régimen de prima media con prestación definida (RPM) al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS).

PRUEBAS DE OFICIO:

Para que el señor JUEZ requiera a la entidad demandada **AFP PORVENIR S.A (RAIS)**, e indiquen cuáles han sido las tasas de rentabilidad históricas ofrecidas y aplicadas a los afiliados sobre los aportes obligatorios al Fondo, para el caso concreto desde el año de 1998 hasta la fecha; indicando cuales fueron las tasas aplicadas a la cuenta individual del señor JORGE HERNANDO CASTAÑO TOBÓN.



ANEXOS:

Me permito anexar los documentos descritos en el acápite de pruebas, copia de la demanda con sus anexos para el traslado de la demanda, Así como los siguientes documentos:

- Poder para actuar
- Certificado Existencia y representación legal de la entidad demandada PORVENIR S.A

NOTIFICACIONES

DEMANDANTE: El señor JORGE CASTAÑO TOBÓN podrá ser notificado en la

Correo electrónico: castanotobonjorgeh@gmail.com

DEMANDADOS:

- **PORVENIR S.A** Carrera 13 #34-38 local 1 Porvenir, Pereira, Risaralda

Correo electrónico: notificacionesjudiciales@porvenir.com.co

-**COLPENSIONES:** Carrera 12 No 18-101 Pereira, Risaralda

Correo electrónico: notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co

LA SUSCRITA: Recibiré notificaciones en la Carrera 8 No 23-09 Edificio Cámara de Comercio de Pereira, Risaralda

Correo electrónico: abogadalaaurarincon@gmail.com

Celular: 321 8422735

Atentamente,



LAURA VANESSA RINCÓN ROMÁN

C.C No 1.088.304.969 expedida en Pereira

T.P No 263.377 del C.S de la J.